

## Estados Unidos conocía la violencia de El Salvador

*Para quienes han tratado el caso de El Salvador durante años, la sorpresa del informe de la Comisión de la verdad fue que alguna gente se haya sorprendido. ¿Cómo puede alguien decir, oh Dios mío, nos mintieron? Asesor del Congreso, 6 de mayo de 1993.*

*En los últimos doce años no ha sido ningún secreto que en El Salvador subsidiamos a los escuadrones de la muerte y encubrimos sus crímenes. Cualquiera que se fije en las muertes de no combatientes, como el asesinato de las religiosas y de los jesuitas y en las masacres de campesinos, puede figurarse cómo sucedieron esos hechos, aunque Ronald Reagan y George Bush tuvieron cuidado para no hacerlo. Tampoco es novedad que nuestro gobierno nos mintió, repetida y deliberadamente. Mary McGrory, escritora del Washington Post, 18 de marzo de 1993.*

En Washington, nadie debe sorprenderse por la letanía de atrocidades militares descritas en el informe de la Comisión de la verdad. La política de Estados Unidos en Centroamérica predominó en el debate de la política exterior en Washington a lo largo de la década de los ochenta. Más aún, los informes y testimonios de los funcionarios republicanos del Departamento de Estado en los subcomités del Congreso no reflejaban exactamente la realidad de los derechos humanos y el gobierno siempre estaba preparado para presentar en térmi-

nos positivos el último ejemplo de abuso militar. Sin embargo, las fuentes alternativas de información abundaron y estuvieron disponibles en todo momento para cualquier miembro del Congreso que buscara comparar la versión de los sucesos del Departamento de Estado con estas fuentes más independientes y menos politizadas. Los grupos de derechos humanos estadounidenses proporcionaron un flujo constante de informes sobre el respeto del derecho internacional humanitario y de la ley ordinaria sobre los derechos humanos. Las iglesias, las organizaciones de estudiantes y mujeres y toda clase de grupos interesados en el respeto de los derechos humanos mantuvieron un flujo constante de delegaciones que visitaron El Salvador, que sirvió como fuente alternativa de información, para quienes se preocuparon por investigar.

Pese a ello, la publicación del informe de la Comisión de la verdad, el 15 de marzo, en New York, ha provocado sorpresa y escándalo. El presidente del subcomité de la Cámara que supervisa la política para las Américas, el representante demócrata Robert G. Torricelli (New Jersey), dijo que "ahora es claro que mientras el gobierno de Reagan certificaba progreso en los derechos humanos en El Salvador, sabía la terrible verdad de que los militares salvadoreños estaban llevando a cabo una campaña de terror y tortura" (*New York Times*, 21 de marzo de 1993). Al acusar a los funcionarios de Reagan de haber mentado, Torricelli prometió "revisar cada palabra del gobierno de

Reagan" y presentar cargos de desacato al Congreso contra todo funcionario que haya mentido bajo juramento.

Asesores del Congreso entrevistados en Washington, a comienzos de mayo, dijeron que el informe, según las palabras de un asesor republicano, "no nos dijo nada que ya no supiéramos. No había sorpresas". Jim McGovern, quien ha dado seguimiento a la situación de El Salvador durante años como ayudante del congresista demócrata Joe Moakley, estima que el 99 por ciento del Congreso considera que el informe es "honesto y objetivo. Nadie debiera estar sorprendido por el informe", dijo McGovern. "Confirma lo que la gente ya sabía. Estoy sorprendido de que se hayan sorprendido". Es notable el silencio de Jesse Helms, quien por lo general casi nunca se queda callado. Helms, un senador republicano de extrema derecha de North Carolina, fue mencionado en varios artículos por haber apoyado y defendido lealmente a Roberto D'Aubuisson durante muchos años.

Pese a que hubo un debate muy vivo en la prensa y en los círculos políticos estadounidenses, de hecho, la mayoría no ha leído el informe, dado que Naciones Unidas no ha publicado la versión en inglés. Hasta en la primera semana de mayo, el gobierno de Estados Unidos distribuyó limitadamente su traducción no oficial para uso de las oficinas gubernamentales. Los más dudosos expresaron efusivamente su aprecio del informe y la valentía de quienes lo prepararon. "Sienta un precedente muy útil para la comunidad mundial", dijo un asesor del senado en mayo. "El precedente consiste en que cuando uno es confrontado por esta clase de información, la verdad eventualmente aparece. El informe tiene proporciones históricas". La atención de los periódicos, naturalmente, se centró en los casos más conocidos en Estados Unidos, los de las religiosas, los jesuitas y el arzobispo Romero. Al no haber detalles en el informe ni en los resultados de la investigación de la Comisión, la discusión se centró en el papel de Estados Unidos, ¿qué sabía Washington? ¿Es Estados Unidos cómplice del baño de sangre? ¿Informó honestamente el Departamento de Estado al Congreso?

*The Washington Post* publicó un artículo novedoso y franco, titulado "Sabíamos, por su-

puesto", escrito por un analista de política exterior de la *Rand Corporation*, un centro de investigación responsable de un estudio crítico de la política de Estados Unidos en El Salvador, encargado por el Departamento de Defensa (*American Counterinsurgency Doctrine and El Salvador: The Frustrations of Reform and the Illusions of Nation Building*, Benjamín C. Schwarz, California, 1991):

El informe de Naciones Unidas sobre las atrocidades de la guerra civil de El Salvador publicado recientemente confirma lo que desde hace tiempo nos hemos negado a confrontar: en El Salvador, los norteamericanos danzaron con el mal. Si nuestra política en este país se enfrenta honestamente, todos nosotros somos ampliamente responsables, demócratas y republicanos, "liberales" y "conservadores".

El informe sugiere una serie de preguntas sobre la política estadounidense en El Salvador, pero la pregunta supuestamente más "difícil" podemos considerarla respondida de inmediato: sabíamos, por supuesto.

El proyecto norteamericano en El Salvador dio al gobierno y a los militares estadounidenses acceso a todas las facetas de la vida pública salvadoreña. Por lo tanto, los funcionarios norteamericanos siempre supieron *más* que los grupos de derechos humanos, los periodistas y los expertos no partidistas que durante catorce años informaron sobre la brutalidad y la corrupción del ejército salvadoreño. Muy pronto, en 1981, por ejemplo, una agencia de inteligencia estadounidense elaboró una evaluación detallada sobre las fuentes y la extensión de la violencia derechista en El Salvador, mostrando que los "escuadrones de la muerte", lejos de ser grupos de delincuentes extremistas, tal como lo afirmaban públicamente los funcionarios estadounidenses, eran los instrumentos de las fuerzas armadas salvadoreñas para aplastar a los disidentes y la "amenaza guerrillera", usualmente considerados sinónimos (*Washington Post*, 8 de abril de 1993).

Por su parte, la reacción de los ex funcionarios republicanos oscila entre el silencio y la fanfarronería combativa. El embajador de Estados Uni-

dos en El Salvador entre 1981 y 1983, Dean Hinton, rechazó dar entrevistas, así como también Jeane Kirkpatrick, la controvertida asesora de política exterior de la época de Reagan, quien en 1980 explicó los asesinatos de las cuatro religiosas norteamericanas diciendo que “no eran simples monjas, sino que también eran agitadoras políticas”.

Thomas Enders, asistente del secretario de Estado para asuntos interamericanos entre 1981 y 1983, reconoció, coincidiendo con el informe, que es “indudable que estábamos trabajando con una organización en la que había elementos violentos y criminales a los que no controlábamos” (*New York Times*, 16 de marzo de 1993). El mismo Enders fue mencionado en varios artículos sobre la Comisión de la verdad por sus afirmaciones sobre El Mozote, hechas en febrero de 1982. Cuando se le preguntó sobre los informes de una gran masacre de civiles que habían aparecido en el *New York Times* y en el *Washington Post*, Enders dijo: “enviamos a dos funcionarios de la embajada a investigar los informes recientes sobre una masacre en la villa de El Mozote, en Morazán. Informaron que aunque era claro que había ocurrido un enfrentamiento armado entre las guerrillas que ocupaban El Mozote y las fuerzas gubernamentales que las atacaron en diciembre pasado, no pudieron encontrar evidencia para confirmar que las fuerzas gubernamentales masacraron civiles sistemáticamente en la operación en la zona”. El 29 de marzo de 1993, en el *Washington Post*, Enders admitió, hasta cierto punto, su error de 1982:

Estaba equivocado. Durante once años ningún extraño visitó estas zonas controladas por los guerrilleros. El año pasado, la Comisión de la verdad de Naciones Unidas lo hizo. Encontró los cuerpos. ¿Encubrimiento? La guerrilla, no la embajada, controlaba la evidencia. [...] En mi testimonio no negué los asesinatos. Soy responsable por no haber sido capaz de confirmarlos. Por lo demás, no pido disculpas. Una de las guerras civiles más salvaje ha terminado ya.

Con la sabiduría de quien conoce las cosas desde dentro, Enders observó en marzo que la “ironía de esto es que si hubiéramos sabido la ex-

tensión de esta cosa terrible en aquel tiempo, probablemente habríamos retrocedido horrorizados, no habríamos sido capaces de animar a los salvadoreños a continuar con las elecciones y a transformar su sociedad” (*New York Times*, 16 de marzo de 1993). Después se supo que los dos funcionarios de la embajada nunca llegaron hasta El Mozote, sino que simplemente sobrevolaron el área en un helicóptero. *60 Minutes*, un programa de televisión de noticias muy especializado, emitió un programa sobre El Salvador el día antes que se publicara el informe de la Comisión de la verdad. Un funcionario de la embajada entrevistado dijo que, en efecto, él había informado al embajador que, a partir de entrevistas con los campesinos que huyeron del área, concluía que el ejército había matado masivamente. Tal como lo muestra el testimonio de Enders en 1982, esta conclusión no aparece reflejada en las declaraciones del Departamento de Estado de la época.

Característicamente agresivo, Elliot Abrams, quien ocupó los cargos más elevados de derechos humanos y de América Latina en el Departamento de Estado en la época de Reagan, no se arrepiente de nada. Abrams dijo al *Washington Post* que el “expediente [de Reagan] en El Salvador muestra resultados fabulosos” y que atacar ahora esa política es “un esfuerzo de postguerra fría para reescribir la historia”. Abrams “rechazó la amenaza de Torricello como *McCarthyite crap*” (*Washington Post*, 21 de marzo de 1993).

Quizás la respuesta más asombrosa fue la del ex secretario de Estado Alexander Haig, un general que fue comandante de la OTAN, quien intentó desconocer la referencia que hizo a las religiosas estadounidenses —por otro lado, muy mencionada—, en su testimonio ante el Congreso, en marzo de 1981. En una carta al *New York Times*, Haig sostiene que lo que compartió con el comité de asuntos exteriores del Congreso fue un “informe sobre una declaración salvadoreña en respuesta a una investigación, no una declaración de Estados Unidos, ciertamente no una declaración personal”. Las palabras de Haig ese día, hace más de una década, fueron un duro ejemplo del intento de los republicanos para justificar lo injustificable y para censurar a la víctima. Según un vídeo del testimo-

nio, Haig dijo:

Quisiera sugerirles que algunas de las investigaciones lo llevarían a uno a creer que tal vez el vehículo de las religiosas haya tratado de sobrepasar un retén o accidentalmente haya sido percibido tratando de hacerlo, y hubo un intercambio de disparos, y tal vez aquellos responsables de las muertes trataron de encubrir las, y ésto pudo haber ocurrido en un nivel muy bajo de competencia y motivación en el contexto del asunto en sí mismo.

Bill Ford, un abogado de New York y hermano de la religiosa de *Maryknoll* Ita Ford, dijo en respuesta a Haig que un investigador del *FBI* informó a las familias en aquel momento que "él no sabía de dónde Haig había sacado sus datos. Después de una investigación inicial del *FBI*, el gobierno [estadounidense] sabía que las mujeres habían sido violadas, vendadas y asesinadas con una sola bala en la parte posterior de la cabeza, al estilo de una ejecución. Una de las mujeres quedó sin cara a causa de un balazo. No había agujeros de bala ni casquillos en el vehículo de las mujeres. El *FBI* no tiene razón para creer que hubo un intercambio de fuego ni que las mujeres estuviesen armadas" (*The New York Times*, 22 de marzo de 1993 y 1 de abril de 1993).

El 16 de marzo, un día después de haber sido publicado el informe en New York, los tres miembros de la Comisión de la verdad se presentaron ante el subcomité del hemisferio occidental, parte del comité de asuntos exteriores de la Cámara de representantes, para informar sobre el resultado de su investigación y responder preguntas. Varios congresistas preguntaron a los comisionados sobre el papel de Estados Unidos en la violencia y qué sabían o pudieron haber sabido Reagan y Bush acerca de cómo el ejército salvadoreño respetaba los derechos humanos. "Yo diría que cierta cantidad de hechos ocurridos en El Salvador fueron conocidos por los funcionarios estadounidenses o deberían haberlo sido", dijo el profesor Thomas Buergenthal. "En algunos casos, existe la sensación de que no deseaban conocer" (*Washington Post*, 17 de marzo de 1993).

Esta audiencia pública fue seguida de dos se-



siones más para la comunidad del Congreso. El congresista Moakley, presidente del equipo que monitoreó el caso de la UCA, invitó a quince miembros del Congreso a reunirse con los comisionados. Hubo otra sesión informativa para treinta asesores del Congreso. Las dos sesiones fueron a puerta cerrada. Una fuente con conocimiento de lo que se transpiró en esas dos sesiones informativas dijo que los asistentes hicieron muchas preguntas acerca de "lo que no aparecía en el informe, como por qué no se habían mencionado más civiles". Asimismo, buscaban asesoría sobre qué debería hacer el Congreso en respuesta a los resultados de la Comisión.

Una semana después de la publicación del informe, Joe Moakley volvió a reunir a sus colegas de la cámara y del senado, esta vez para planificar la estrategia y los pasos concretos que podrían dar para dar seguimiento al informe, examinar la complicidad de Estados Unidos en la violencia y urgir el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión por parte del gobierno de Cristiani. El 26 de marzo, cuatro senadores y catorce congresistas escribieron al presidente Clinton pidiendo "su ayuda para clarificar el conocimiento que el gobierno

de Estados Unidos tuvo de los sucesos ocurridos en El Salvador entre 1980 y 1991". Todos los presidentes de los comités encargados de la política exterior e inteligencia firmaron la carta. Esta, además, decía, "dada la masiva cantidad de víctimas civiles y la enorme asistencia dada por Estados Unidos al gobierno salvadoreño, tenemos la obligación de proporcionar el recuento público más completo posible de lo que los funcionarios estadounidenses sabían y cuándo lo supieron sobre los treinta y dos casos de derechos humanos investigados por la Comisión de la verdad".

Los legisladores pidieron al gobierno reunir y revisar toda la evidencia documental disponible en las fuentes diplomáticas y de inteligencia, relacionada con los casos incluidos en el informe. La mayor parte de este material se ha mantenido en secreto y debe ser "reclasificado" para hacerlo público. "La manera más clara, segura y honesta para poner las cosas en su lugar es entregar los documentos", dijo Jim McGovern. "La guerra civil ya terminó, ya no existe ningún interés de seguridad nacional. La idea no es cortar cabezas, sino usar los documentos para asegurar que estas cosas no vuelvan a suceder otra vez".

Tres miembros del grupo de derechos humanos del Congreso —dos de ellos republicanos—, siguieron presionando con una carta dirigida al secretario de Estado Warren Christopher, el 15 de abril. En su carta, los congresistas respaldan las conclusiones de la Comisión de la verdad y urgen al Departamento de Estado monitorear el cumplimiento de las recomendaciones del gobierno salvadoreño.

A finales de mayo, unos 140 congresistas escribieron al presidente Cristiani aplaudiendo "la valentía y la visión demostrada por el gobierno de El Salvador y el FMLN al acordar la creación de la Comisión de la verdad como un elemento importante del proceso de paz y de la reconciliación nacional". Al recordarle a Cristiani que las recomendaciones de la Comisión tienen carácter vinculante, los congresistas lo animan a "actuar rápida y decisivamente para implementar" esas recomendaciones.

Dos meses después de la publicación del infor-

me de la Comisión de la verdad, está claro que los primeros informes de la prensa indicando que se había comenzado a investigar y que una comisión de la verdad estadounidense había sido designada eran exagerados o quizás expresaban el entusiasmo del momento, que se disipó pronto o cambió de dirección. En su audiencia del 17 de marzo, al congresista Torricelli se le escapó que tenía la intención de dar instrucciones a su equipo para que revisara los testimonios de la era de Reagan para examinar si eran falsos.

Este Congreso hace diez años estableció un proceso por el cual el presidente Reagan certificaría los avances hechos en derechos humanos para continuar con la ayuda militar para El Salvador. En la actualidad es meridianamente claro que Ronald Reagan hizo estas certificaciones desafiando a la verdad. Si [los funcionarios gubernamentales] certificaron que desconocían los asesinatos cuando en realidad sabían lo que estaba pasando, es mejor que no hayan dicho bajo juramento. Este comité revisará cada palabra pronunciada por cada funcionario del gobierno de Reagan... Yo, el primero, no estaré satisfecho hasta que no conozcamos toda la verdad sobre nuestro propio intento para que estos abusos no fueran conocidos por el Congreso y el pueblo norteamericano (*Washington Post*, 17 de marzo de 1993).

Torricelli limitó sus críticas al período de Reagan, según informes, por ser amigo de Bernard Aronson, el asistente del secretario de Estado para asuntos interamericanos en la época de Bush, quien ha seguido ocupando ese puesto en los primeros meses del gobierno de Clinton. La revisión de Torricelli está siendo llevada a cabo por el Servicio de Investigación del Congreso y sus conclusiones serán publicadas pronto. Aparte de unos pocos incidentes infames —como las apologías y distorsiones de la masacre de El Mozote y el asesinato de las religiosas—, es poco probable que la investigación descubra muchas mentiras. A lo largo de los ochenta, los funcionarios del gobierno tuvieron cuidado en reconocer que los problemas en el área de los derechos humanos persistían, pero que la situación estaba mejorando lentamente y tanto la Fuerza Armada salvadoreña como el go-

bierno civil estaban comprometidos firmemente en continuar con la guerra respetando los convenios de Ginebra. "No estamos diciendo que los problemas de los derechos humanos del país se han resuelto", dijo Thomas Enders al comité de asuntos exteriores del senado, el 8 de febrero de 1982. "Al contrario, creemos que grandes problemas persisten. Pero vemos progreso en la tendencia a disminuir las muertes de los no combatientes desde principios de 1981" (citado en el *Washington Post*, 21 de marzo de 1993). Algunos observadores dicen que la perspectiva de Torricelli no es la que dará mejores resultados. Tal como lo formuló un ayudante del senado recientemente, "el punto es lo que no conocemos, no lo que se encuentra en el expediente público".

El gobierno y sus críticos con frecuencia se enredan en lo que se conoce como "el juego de los números". Nadie podría negar que el número de civiles muertos disminuyó a partir de los comienzos de la década de 1980, cuando entre 800 y 1000 salvadoreños no combatientes morían mensualmente. "Es absurdo decir que no nos preocupamos", dijo Elliot Abrams, en marzo. "No se puede hacer un argumento de derechos humanos para abandonar al gobierno salvadoreño a comienzos de los ochenta y permitir una victoria [del FMLN]. Cuando concluyó el gobierno de Carter, unas 800 muertes eran causadas por los escuadrones de la muerte mensualmente, y gracias a nuestro trabajo, extremadamente duro, reducimos esa cantidad en un 95 por ciento. Es un buen resultado" (*New York Times*, 16 de marzo de 1993).

El 24 de marzo, el nuevo secretario de Estado de Clinton, Warren Christopher, anunció lo que algunos observadores describieron como una medida preventiva: la integración de un panel para "examinar las implicaciones" del informe en "el curso de la política exterior estadounidense y en las operaciones del Departamento de Estado". Christopher señaló que aunque el informe "no incluye ninguna crítica explícita del gobierno de Estados Unidos o de sus representantes... cuando surgen cuestionamientos que desafían nuestro compromiso [con los derechos humanos], tenemos la obligación de buscar respuestas". El comité está integrado por dos embajadores de carrera retira-

dos, George Vest y Richard Murphy, y por dos académicos residentes en Washington, quienes sirven como asesores. Ninguno de los cuatro tiene gran experiencia en América Latina. Se les ha ordenado examinar las respuestas a las preguntas del Congreso y a los cuestionamientos públicos, los informes sobre los derechos humanos y "hasta dónde animamos a los funcionarios del Departamento de Estado a realizar investigaciones completas e independientes en ambos lados".

Aunque algunos republicanos consideran la investigación una "cacería de brujas" y los miembros de la sección de América Latina del Departamento de Estado han reaccionado defensivamente, es claro que la investigación consistirá en un examen estrecho de la conducta de los funcionarios de dicha dependencia gubernamental y de la embajada, y no en una revisión de la política ni en un intento para establecer qué se hizo erróneamente. "Es un asunto de manejo", dijo un miembro del *Central America Working Group*, una coalición de organizaciones no gubernamentales que monitorea la política estadounidense en la región. "La comisión se fijará en la conducta no profesional y mal asesorada".

Quizás lo más notable sea el hecho de que el panel sólo estudiará el comportamiento del personal del Departamento de Estado. Todavía no se ha lanzado una investigación similar sobre la conducta del personal del Pentágono, del *FBI*, de la *CIA* y de la *DIA* ni de ninguna de las otras agencias de inteligencia que ha trabajado en El Salvador en los años anteriores. La mayoría de los asesores del Congreso y de los activistas no gubernamentales a quienes se les preguntó sobre este asunto en mayo, identificó lo anterior como la gran debilidad de la respuesta del gobierno de Clinton al informe de la Comisión de la verdad y, por lo tanto, pidió una investigación similar en las otras agencias estadounidenses. Robert White, el embajador de Estados Unidos en El Salvador de marzo de 1980 a enero de 1981, lo formuló de la siguiente manera, "el Departamento de Estado es sólo uno de los actores y ciertamente no es el más importante." El *New York Times* urgió a Clinton a hacer una "investigación completa de lo que parece ser un encubrimiento deliberado de los crímenes de derechos hu-

manos en El Salvador. [...] Para ser honestos, la investigación debe empezar en 1980, puesto que el encubrimiento comenzó con el presidente Carter. No sólo debe dirigirse hacia los intentos oficiales para engañar al Congreso, sino también hacia los esfuerzos para desanimar la investigación por parte de nuevas organizaciones. Y debería examinar por qué los funcionarios actuaron tal como lo hicieron" (*New York Times*, 26 de marzo de 1993).

Un ayudante del senado con mucha experiencia en política exterior dijo que era "escéptico" sobre la profundidad de la investigación del Departamento de Estado. "Básicamente es algo interno. Pero por el otro lado, quiero creer que el nuevo gobierno es sincero en su deseo de poner las cosas en su sitio. Tendremos que esperar y ver con lo que salen".

A mediados de mayo, el gobierno de Clinton aún no había respondido a la carta de los congresistas del 26 de marzo, pidiendo la apertura de los archivos sobre los 32 casos que aparecen en el informe. Jim McGovern, de la oficina del congresista Moakley, quien coordina la gestión ante Clinton, dice que ha recibido una respuesta informal "favorable" a la petición por parte del Departamento de Estado, pero que "el nuevo equipo todavía no se encuentra en su sitio".

Existe un vacío de poder en el Departamento de Estado. Los puestos claves no han sido llenados ni se han considerado las políticas. Aunque las audiencias para confirmar a Alex Watson, el candidato de Clinton para asistente del secretario de Estado para asuntos interamericanos, se tuvieron finalmente el 7 de mayo, el senado aún no ha confirmado el nombramiento. Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en El Salvador continúa sin embajador. Durante más de un año, los demócratas del senado bloquearon el nombramiento del candidato del gobierno de Bush para remplazar a William Walker porque aquél supuestamente mintió en relación al papel de Estados Unidos en la operación de abastecimiento a los contras. Recientemente, el presidente Clinton nominó a Alan H. Flanigan, un funcionario de carrera del servicio exterior, quien ha estado en Perú, Portugal y Turquía. Desde 1990, Flanigan ha sido el diplomático

de más alto rango en Cuba.

La estrategia del congresista Moakley, apoyada por los activistas interesados en El Salvador como el *Central America Working Group*, consiste en presionar para que toda la documentación sobre El Salvador se haga pública antes de considerar el nombramiento de una comisión investigadora. "El primer paso es desclasificar los documentos", dice McGovern. "Un panel de alto nivel sin nueva información es algo inútil". Al preguntarle si espera encontrar evidencia que indique que Estados Unidos sabía acerca de la responsabilidad militar en la actividad de los escuadrones de la muerte y en otras violaciones, McGovern recordó la experiencia del grupo de trabajo de Moakley encargado de dar seguimiento al asesinato de los jesuitas, "si encontramos todo esto en el caso de los jesuitas sin contar con mucho dinero, ¿qué debe conocer la CIA? Si los cables no existen, deberían empezar a limpiar la CIA porque debe ser una organización muy incompetente. ¿Para qué les estamos pagando?". Otro asesor dijo que una desclasificación amplia podría "ser el paso más significativo. La investigación del Departamento de Estado no tendrá el impacto público que tendría la liberación de los documentos". Un asesor del senado calificó este caso como una prueba para el gobierno de Clinton. "La apertura de los archivos tiene dos caras en términos políticos".

Existe algún indicio de que el gobierno de Clinton puede estar más inclinado a desclasificar el material considerado como secreto. El 26 de abril, el presidente ordenó re-evaluar el sistema de seguridad actual para clasificar. Desde esta fecha hasta noviembre, el gobierno revisará el sistema de clasificación vigente a la luz del período de postguerra fría y propondrá nuevos criterios. Privadamente, el Departamento de Estado ha prometido liberar los documentos sobre El Salvador tal como lo piden los congresistas en su carta del 26 de marzo, prescindiendo de las decisiones adoptadas por otros, como el Pentágono y la CIA.

En su único comentario sobre el papel de Estados Unidos en El Salvador, la Comisión de la verdad dice que el gobierno estadounidense "toleraba" las actividades de los salvadoreños residentes

en Miami, quienes "directamente financiaron e indirectamente ayudaron a dirigir algunos escuadrones de la muerte...". La Comisión recomendó hacer una investigación completa para aclarar "esta trágica historia y asegurar que nunca más sea repetida, en los Estados Unidos, la tolerancia a personas vinculadas con actos de terror en otros países" (*De la locura a la esperanza. La guerra de 12 años en El Salvador. Informe de la Comisión de la verdad*, marzo de 1993, p. 144). En este contexto, varios miembros importantes del Congreso están preparando una entrevista con el Fiscal General Janet Reno para pedirle iniciar una investigación sobre el financiamiento de los escuadrones de la muerte de El Salvador en Miami.

En los últimos años, en Estados Unidos, no había tenido lugar una cobertura de prensa ni un debate público sobre los sucesos de El Salvador y el papel de Estados Unidos en la década pasada como el provocado por el informe de la Comisión de la verdad. Para los miembros del Congreso y sus equipos y para los grupos de activistas no gubernamentales que han dado seguimiento al proceso salvadoreño en la década de 1980, la reacción ante el informe genera esperanza en el sentido de que Washington mirará honestamente el papel de Estados Unidos en El Salvador y la complicidad estadounidense con la violencia. El tema ha sido colocado en la agenda de Washington en un momento que podría resultar favorable, o podría ir en su contra.

El nuevo gobierno de Clinton tiene un mandato claro, dar prioridad a los asuntos domésticos. En 1992, los electores criticaron la falta de atención de los republicanos a los asuntos económicos y sociales de Estados Unidos, tales como la salud pública y el crecimiento de la brecha entre ricos y pobres, negros y blancos. Durante la campaña, George Bush fue presentado como un presidente que se sentía más cómodo viajando a una capital extranjera para reunirse con otro colega jefe de Estado que enfrentando los problemas difíciles y nada glamorosos de Estados Unidos. El presidente Clinton ha prometido un progreso rápido en varios asuntos domésticos y no puede ser visto priorizando los asuntos externos. Y en la medida en que se dedique a atender la política exterior, proble-

mas candentes como los de la ex Yugoslavia y Rusia atraerán su atención muy probablemente. Al mismo tiempo, el gobierno de Clinton ha prometido una apertura, una honestidad y una moralidad gubernamentales nuevas y, en muchos aspectos, está ansioso por distanciarse de las prácticas republicanas.

A pesar de su compromiso filosófico con la apertura, la voluntad de Clinton para abrir los archivos de una década sobre El Salvador puede caer víctima de su deseo por asegurar los votos republicanos para su presupuesto, su plan de salud pública y otros temas domésticos que requieren del apoyo bipartidista. Ningún tema polarizó tanto al Congreso en la década de 1980 como Centroamérica. Si bien Nicaragua y los contras causaron más división, y la política sobre El Salvador, de hecho, gozó del apoyo de ambos partidos, nadie es tan agudo como para recordar esas batallas ahora. Es previsible que los republicanos rechacen vociferantemente cualquier intento para presentarlos como los únicos responsables de la política. Obviamente, lo que se encuentra en los archivos podría resultar explosivo y embarazoso para el partido republicano. Según el *Miami Herald*, Elliot Abrams "censuró a los revisionistas 'cínicos' del Congreso por criticar ahora una política que 'no tuvieron' el valor ni los votos para rechazar hace una década por miedo a 'perder' El Salvador ante el comunismo" (*Miami Herald*, 21 de marzo de 1993).

En los comentarios del vocero del Departamento de Estado Richard Boucher, quien también ocupó este cargo con los republicanos, se encuentra un indicio del rechazo potencial del gobierno de Clinton a investigar en profundidad el papel de Estados Unidos en El Salvador. Al mismo tiempo que alababa el informe, Boucher rechazó que los gobiernos de Reagan y Bush fueran responsables por no haber protegido los derechos humanos en El Salvador. "Eso es algo que los analistas e historiadores pueden tratar de enjuiciar. Yo no voy a intentar hacer ese juicio en este momento" (*New York Times*, 16 de marzo de 1993).

Al preguntar qué se puede esperar de la comisión de Christopher, un ayudante de un congresista republicano dijo, "no mucho. La información



más importante la tienen el Departamento de Defensa y la *CIA*. Pienso que el gobierno de Clinton quiere tomar distancia del conflicto sobre Centroamérica. Tiene suficiente problema con su agenda como para querer irritar a los republicanos sobre esto". Otro ayudante caracterizó el interés del Congreso este año como "empleos, empleos, empleos", una referencia al hecho de que la primera prioridad de Washington debe ser crear nuevos puestos de trabajo para los norteamericanos.

El ex embajador Robert White también se muestra cauteloso y no espera mucho. "Fue una política de doce años en la cual todos fueron cómplices", dijo en mayo. "Demócratas, republicanos, militares y civiles estaban comprometidos en el 'desmadre' de El Salvador. Muy poca gente está motivada realmente para hurgar la verdad e integrar una comisión de la verdad que haga el trabajo que debe ser hecho. Existe una relación simbiótica entre la persona que miente y la que acepta la mentira".

Un asesor del Congreso que ha seguido el proceso salvadoreño desde la década de los setenta piensa que El Salvador no permanecerá en la agenda del Congreso. "Es difícil decir si el Congreso mantendrá su atención [en El Salvador]. Fue hace tanto tiempo. Esa gente ya no se encuentra en el gobierno y ahora tenemos otro nuevo y otros asuntos que tratar. Esta audiencia de la Comisión de la verdad fue la primera vez en mucho tiempo que alguien pone atención en El Salvador, y puede ser la última".

A pesar de actitudes como ésta, los asesores del senado y de la cámara de representantes afirman que no han descartado el nombramiento de una comisión de congresistas para investigar, pero dependiendo de los resultados de las iniciativas ya tomadas. "Si estos esfuerzos no producen resultados, siempre podemos intentar algo más", dijo un asesor del senado. "No veo por qué no podemos hacer un esfuerzo tan bueno como la Comisión de la verdad en nuestro gobierno".

Lo más probable es el condicionamiento de la ayuda militar futura y tal vez el de otro tipo de ayuda para implementar las recomendaciones de la Comisión de la verdad por parte del gobierno de

Cristiani. En febrero, por iniciativa propia, el gobierno de Clinton congeló once millones de dólares de ayuda militar para El Salvador hasta que todos los oficiales militares mencionados por la Comisión *ad hoc* hubiesen sido "depurados". El gobierno ha pedido 2.7 millones de dólares en ayuda militar para el año fiscal de 1994.

Un indicio de la voluntad del Congreso para continuar apoyando el gobierno de Cristiani es la reacción ante la amnistía absoluta aprobada rápidamente por la asamblea salvadoreña el 20 de marzo. Antes de aprobar la ley, el senador Christopher Dodd, quien preside el comité para relaciones internacionales del senado, dijo que una amnistía tan superficial "sería un retroceso grande, enviaría el mensaje de que nadie es responsable de nada" (*Washington Post*, 17 de marzo de 1993). Dos miembros de la cámara estaban tan furiosos con la amnistía que dieron pasos para cortar la ayuda a El Salvador, incluida la de carácter humanitario. Al observar que algunos argumentaban que debería dejarse a los salvadoreños decidir la aceptación o el rechazo de la amnistía, un asesor observó que "la cuestión es si El Salvador es suficientemente democrático como para que la voz del pueblo salvadoreño sea oída en la asamblea". Más aún, observó que El Salvador está obligado por la legislación internacional. "¿Es apropiado que el pueblo opte por amnistiar esta clase de crímenes? ¿Debería haber amnistía aunque el 51 por ciento del pueblo de la Alemania nazi votara en su favor? La comunidad internacional también tiene una obligación". El ex embajador Robert White calificó la amnistía como "un abuso terrible de poder". *The New York Times* tituló su comentario sobre la amnistía, "El Salvador: se escapa con el asesinato".

Cometa atrocidades en una escala suficientemente grande y puede escapar inmune, argumentando que pedir responsabilidades desestabilizaría el orden político. Esta es la dura conclusión que se saca de la ley de amnistía absoluta de El Salvador, promovida por el presidente Alfredo Cristiani y aprobada rápidamente el pasado fin de semana por la asamblea legislativa, controlada por su partido, que favorece a los militares. Este apresuramiento mal

visto para proteger a los culpables es un insulto para el proceso de paz patrocinado por Naciones Unidas, para la legislación internacional de derechos humanos y para las víctimas de El Salvador.

Estados Unidos y otras naciones donantes pueden enderezar al gobierno de Cristiani. El gobierno de Clinton ya ha detenido once millones de dólares de ayuda hasta que El Salvador cumpla con las recomendaciones de Naciones

Unidas. Si llegara a ser necesario, la presión financiera puede aumentar. Dado el papel que los gobiernos de Reagan y Bush tuvieron canalizando dinero hacia el ejército salvadoreño y encubriendo lo que sabían acerca de la responsabilidad de estos crímenes, Washington no puede simplemente desentenderse (*New York Times*, 25 de marzo de 1993).

D. M.

